

AMPARO

De garantías promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por Juan Montalvo, Pablo Aparicio y Crescencio Carrillo, contra el C. Gefe político de la Capital de este Estado, que los condenó á la última pena como salteadores y plagiaros.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que acordado por la Suprema Corte de Justicia que se devolviera el presente juicio de amparo promovido por Juan Montalvo, Pablo Aparicio y Crescencio Carrillo, para que sustanciándolo conforme á ley, se pronuncie la sentencia concediendo ó negando el amparo, y que en caso de que los solicitantes no lo quieran continuar, obre con arreglo á derecho; en cuya virtud el juzgado dictó el auto de 31 del mes pasado, haciendo saber el contenido del oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que de conformidad con la ley de 20 de Enero de 1869, se sacara copia del ocurno de los quejosos del mes próximo pasado, y se remitiera al C. Gefe político de esta capital, para que dentro del tercero dia informara con justificacion sobre su contenido, y en seguida trasladado al que suscribe para que pida lo conveniente, y evacuándolo, manifiesta; que del informe del C. Gefe político responsable, aparece: que habiendo sido suspenso en sus funciones de Gefe político el C. Trinidad Acuña, el Supremo Gobierno del Estado tuvo á bien nombrarlo para sustituirlo con el carácter de interino, del que remite copia certificada; y que en cuanto á la sustanciacion del acta que instruyó contra Montalvo y socios, pasó á la revision del superior, mediante la aprobacion de lo practicado, y en cuya virtud el Gobierno tuvo á bien conmutar á los reos la pena de muerte

en la de cinco años de presidio, segun consta de la ejecutoria que acompaña en copia certificada.

Así pues, vistos los documentos á que se refiere el funcionario responsable, de los que resulta, que su nombramiento fué hecho por impedimento del C. Trinidad Acuña, por la suspension en que está del empleo, y por el Gobierno del Estado, usando de la facultad que le confiere el decreto de la Legislatura de 6 de Noviembre de 1871; y que condenados los quejosos á la pena capital por delito de salteamiento, la pena dicha no se ejecutó por la Gefatura, sino que conforme con el artículo 5º de la ley de 18 de Mayo del mismo año, remitió el acta á la autoridad superior á quien correspondia conmutárselas en la de cinco años de presidio, conforme á la facultad que le otorga la fraccion 9ª del artículo 39 de la Constitucion del Estado; por lo que el Promotor pide al juzgado conforme á la ley de 20 de Enero citada, que no hay lugar al amparo solicitado por Montalvo y socios, por que sentenciados é indultados por las autoridades legítimas, no hay violacion de las garantías individuales y políticas en que fundan su queja, y tanto menos cuanto que se les ha conmutado la pena capital en la de presidio; así lo entiende de derecho.

Zacatecas, 24 de Abril de 1873.—*Jesus M. Licona.*

Es copia. Zacatecas, 24 de Abril de 1873.—*Jesus M. Licona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, Abril 23 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por Juan Montalvo, Pablo Aparicio y Crescencio Carrillo, contra los actos del C. Gefe político de la Capital que los ha juzgado y sentenciado á la última pena como salteadores, conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, considerando los quejosos con ella violada la garantía que protege el artículo 16 de la Constitu-

cion general, por ser el nombramiento del actual Cefe político, contra lo que dispone el artículo 47 de la Constitucion particular del Estado y 104 del Reglamento Económico político, infringiéndose además los artículos 41 y 109 de la citada Constitucion general.—Visto el auto en que se declaró que no había lugar á la suspension provisional solicitada.—Visto el informe justificado de la autoridad responsable, en que manifiesta, que como Cefe político interino ha sido nombrado legalmente conforme á las facultades que concede al Supremo Gobierno del Estado la ley de la Legislatura del mismo; fecha 6 de Noviembre de 1871, y que en todos sus procedimientos se ha ajustado á la ley general de 18 de Mayo del propio año.—Visto el pedimento del C. Promotor fiscal en que demuestra, que no habiendo violacion de garantías individuales, no es de concederse el amparo que solicitan los quejosos.—Visto el último alegato de dos de los solicitantes, por hallarse el otro preso en Guadalupe; la citacion para sentencia y las demas constancias de este juicio.

Considerando: que la base de este recurso es la incompetencia del personal de la Jefatura política, por ser su nombramiento contra la Constitucion del Estado y sus leyes secundarias, cuya base está destruida por la ley citada de 6 de Noviembre de 1871: que aun en el caso de ser el nombramiento del C. Cruz García Rojas ilegal y contrario á la repetida Constitucion y leyes secundarias, las autoridades federales no están establecidas para la vigilancia y cumplimiento de aquellas leyes, ni para resolver si estas son ó no contrarias á la Constitucion particular, la cambian ó reforman legal ó ilegalmente, porque los juicios de amparo no tienen ese objeto; sino solamente proteger las garantías individuales que señala la Constitucion general; que las autoridades federales no deben mezclarse tampoco en el régimen interior de los Estados, ni atacar su soberanía resolviendo si sus autoridades son ó no legítimas, y que los quejosos no

niegan el carácter de salteadores por el que han sido juzgados conforme á la ley de 18 de Mayo de conformidad con los anteriores fundamentos, lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869 y lo pedido por el C. Promotor fiscal, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado resuelve: Primero; que la Justicia de la Union no protege ni ampara á Juan Montalvo, Pablo Aparicio y Crescencio Carrillo, por no haberse violado en sus personas la garantía que protege el artículo 16 de la Constitucion general de la República, con los procedimientos del C. Cefe político de esta Capital que los juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871 como salteadores, condenándolos á la pena de muerte. Segundo: no se impone á los quejosos la multa de la ley, por su notoria insolvencia. Tercero: se advierte al C. Promotor fiscal, por no haber presentado su alegato como lo dispone el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de 9 de Octubre del año próximo pasado. Cuarto: transcribáse esta sentencia al C. Juez de letras de la Villa de Guadalupe, para que la haga saber á Crescencio Carrillo. Quinto: remítanse los autos en revision á dicha Suprema Corte de Justicia, publíquese esta sentencia en el periódico Oficial del Estado y sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial. Hágase saber. El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fe.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Abril 23 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 28 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por Juan Montalvo, Pablo Aparicio y Crescencio Carrillo, contra los actos del C. Cefe político de es-

ta Capital, que los ha juzgado y sentenciado á la pena de muerte como salteadores, conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, estimándose por los quejosos violadas en sus personas las garantías que otorga el artículo 16 de la Constitución general, por ser el nombramiento de dicha autoridad contra lo que dispone el artículo 47 de la Constitución particular del Estado, y el 104 del Reglamento económico político; infringiéndose ademas los artículos 41 y 109 de la citada Constitución.—Vistas las constancias de autos y considerando: que la base que ha servido á los quejosos para entablar el presente recurso, es la incompetencia del personal de la Jefatura política, por su nombramiento contra lo prevenido por la Constitución del Estado y sus leyes secundarias: cuya base está destruida por la ley de 6 de Noviembre de 1871, expedida por el Congreso de ese mismo Estado. Considerando: que los quejosos no niegan su calidad de salteadores y que la autoridad responsable de los actos reclamados ha obrado en la órbita de sus atribuciones, tanto al abocarse el conocimiento de esta causa como al ajustar sus procedimientos á la referida ley de 18 de Mayo de 1871, sin que sus actos importen violación alguna de las garantías aducidas por los quejosos en su petición de amparo. Por tales fundamentos y los propios y legales de la sentencia que se revisa, se decreta: es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Zacatecas pronunciada en 23 de Abril próximo pasado, que dice: la Justicia de la Union no protege ni ampara á Juan Montalvo, Pablo Aparicio y Crescencio Carrillo, por no haberse violado en sus personas la garantía que protege el artículo 16 de la Constitución general de la República, con los procedimientos del C. Gefe político de esta Capital que los juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, como salteadores, condenándolos á la pena de muerte.

Devuélvase la actuación al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta

sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados—Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José María Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 25 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por el C. Plutarco Silva, contra el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 3º suplente de Distrito.

No puedo ponerse en duda en vista de los fundados razonamientos que acaban de exponerse en el informe rendido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para justificarse de los calumniosos cargos que le dirige el C. Silva, en su escrito, que las funciones que ejerce ese respetable cuerpo, así como los demas poderes del Estado, son emanadas de una autoridad que en él representa legítimamente los intereses del pueblo.

Se pretende, sin embargo, que se hagan declaraciones contra esa legítima autoridad: que manden suspender sus actos, por mas pruebas que se den de la justicia para dictarlos; y por último, que se declaren soberanos sobre toda soberanía, los jueces de